

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Liliana María Mora Gil
Interviniente excluyente	Luz Amanda Arias Valdés
Litisconsorte necesario por pasiva	Manuela Cano Mora
DEMANDADO	Protección S.A.
PROCEDENCIA	Juzgado 11 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 <b>011 2018 00304</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 121 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente muerte afiliado. Prestación reconocida en un 50% la hija. Cónyuge y compañera permanente disputan el 50%-
DECISIÓN	Revoca condena en costas a la demandada. Confirma en lo demás

En la fecha, **treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación formulados por los apoderados de todas las partes, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Liliana María Mora Gil**, en contra de **Protección S.A.**, al que se vinculó como interviniente excluyente a la señora **Luz Amanda Arias Valdés**, y como litisconsorte necesaria por pasiva a **Manuela Cano Mora**. Radicado único nacional 05001 3105 **011 2018 00304** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de

los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 021**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

## **Antecedentes**

**Liliana María Mora Gil** convocó a juicio a Protección S.A. pretendiendo el reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, junto con la indexación y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones y frente a lo que es objeto de revisión, indicó que el 11 de enero de 1998, contrajo matrimonio con el señor Carlos Alberto Cano Monsalve, quien falleció el 25 de octubre de 2016; que el señor Cano Monsalve sin motivo alguno o causa legal, abandonó el domicilio conyugal en 2012, no obstante, continuó cumpliendo, hasta el momento de su muerte, con su obligación alimentaria frente a ella y su hija discapacitada Manuela Cano Diosa; que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de su esposo, concediéndole el 50% de la prestación a su hija Manuela, y negándosela a ella bajo el argumento que debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, en tanto, también se presentó a reclamar la prestación la señora Luz Amanda Arias Valdés, en calidad de compañera permanente.

En **auto del 25 de junio de 2018** se admitió y se le ordenó darle trámite a la acción, integrándose como interviniente excluyente a la señora Luz Amanda Arias Valdés, y como litisconsorte necesaria por pasiva, al habersele reconocido el 50% de la pensión de sobrevivientes a Manuela Cano Mora. Debidamente notificada la demandada y las vinculadas allegaron respuesta.

**Protección S.A.**, acepta lo relativo a la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por parte de la señora Liliana en calidad de cónyuge y madre de Manuela, petición frente a la cual se resolvió otorgarle un 50% a Manuela Cano Mora, al haber sido calificada con el 79,9% de PCL, informándose que el otro 50% quedaría en reserva hasta tanto la jurisdicción ordinaria resolviera la controversia existente entre Liliana, en calidad de cónyuge, y la señora Luz Amanda Arias, quien reclamó en calidad de compañera permanente. Frente a los demás supuestos de hecho esgrime no constarle. **No se opuso** a la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión, pero si a la de indexación y costas del proceso. Finalmente formuló las excepciones de mérito que denominó: falta de competencia de Protección para dirimir conflictos de intereses entre cónyuge y compañera permanente, falta de requisito de acreditación de convivencia con el afiliado fallecido, inexistencia de la obligación del pago de intereses moratorios, buena fe, pago y compensación, prescripción y la genérica.

**Manuela Cano Diosa**, a través de curador ad litem, aceptó el matrimonio de la señora Liliana María Mora Gil y Carlos Alberto Cano Monsalve, el cual se celebró el 11 de enero de 1986 y se asentó en el registro el 13 de enero de 1998, así como el contenido del acto que le otorgó la pensión en un 50%, y dejó en suspenso el 50% restante. Frente a los demás hechos esgrime que no le constan. **No se opuso a la** prosperidad de las pretensiones y no presentó excepciones de fondo.

**Luz Amanda Arias Valdés**, formuló demanda, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, intereses moratorios y costas del proceso, argumentando para ello que convivió con el señor Carlos Alberto Cano Monsalve del 20 de julio de 2011 al 25 de octubre de 2016, fecha de su fallecimiento, lapso dentro del cual

compartieron lecho, techo y mesa, a más que se presentó entre los dos ayuda mutua y socorro, al punto que lo acompañó cuando estuvo interno en el hospital; que Carlos Alberto no convivía con su cónyuge desde el 15 de agosto de 2010, pues, el mismo para dicha calenda alquiló un apartamento en Itagüí para vivir; que mediante acta de conciliación del 6 de septiembre de 2010, firmada entre Liliana Mora y Carlos Monsalve, establecieron el valor de la cuota alimentaria para Manuela Cano; que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, no obstante, la entidad le indicó que como también se había presentado a peticionar dicha prestación la señora Liliana Mora, era necesario que acudiera ante la jurisdicción ordinaria.

Admitida dicha acción se procedió a darle traslado a las partes para que se pronunciarían frente a la misma, así:

**Protección S.A.**, no se opuso al reconocimiento y pago de la pensión, pero si a la solicitud de intereses moratorios y costas del proceso. Frente a los hechos manifestó constarlo lo relativo a la petición presentada por la interviniente y la respuesta emitida frente a la misma, con relación a los demás supuestos de hecho indicó que no le constaban. Por último, formuló las excepciones de mérito que denominó: falta de competencia de Protección para dirimir conflictos de intereses entre cónyuge y compañera permanente, falta de requisito de acreditación de convivencia con el afiliado fallecido, inexistencia de la obligación del pago de intereses moratorios, buena fe, pago, compensación, prescripción y la genérica.

La primera instancia **culminó con sentencia** proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito en la que de conformidad con el audio contentivo de la misma, al no coincidir de manera integral con el acta, condenó a Protección S.A., a reconocer y pagar a la señora Liliana María Mora Gil en

calidad de cónyuge y a Luz Amanda Arias Valdés en calidad de compañera permanente la pensión de sobrevivientes, calculando el retroactivo pensional entre el 25 de octubre de 2016 y el 30 de abril de 2021, en favor de la primera en la suma de \$19.667.290,00 y de la segunda en \$4.212.372,00, valores sobre los cuales ordenó la indexación y autorizó el descuento a salud. Dispuso que, a partir del 1º de junio de 2021, la mesada pensional para la señora Liliana Mora, ascendía a \$374.131,00, lo cual correspondía al 82,36% del 50% de la prestación, y para Luz Amanda Arias, \$80.131, que equivale al 17,64% del 50% de la prestación debatida. Absolvió del pago de los intereses moratorios. Declaró no probadas las excepciones propuestas e impuso costas a cargo de Protección y en favor de la demandante e interviniente.

Como fundamento de su decisión manifestó el juez de instancia que ambas demandantes cumplieron con la carga probatoria de acreditar la calidad de beneficiarias de la prestación, en tanto, de la prueba documental obrante en el plenario, especialmente del contrato de arrendamiento, investigación administrativa, concatenados con las declaraciones rendidas, y los interrogatorios de parte, se desprende que la señora Luz Amanda Arias fungió como compañera del causante y que no sólo se encontraba conviviendo con él al momento de su muerte, sino que lo hacía en forma continua e ininterrumpida desde el 20 de julio de 2011, superando con ello el término establecido en la Ley 797 de 2003, y la señora Liliana María Mora acreditó ser cónyuge del afiliado fallecido, haber convivido con el mismo desde el día en que contrajeron matrimonio, 11 de enero de 1986, hasta el 15 de agosto de 2010, manteniendo vivo dicho vínculo a través de los lazos de ayuda mutua y socorro, hasta el momento de su deceso, todo ello, según lo establecido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo que condenó a Protección S.A., a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en favor de la

demandante e interviniente a partir del 25 de octubre de 2016, teniendo como tiempo de convivencia para la señora Luz Amanda, 1.924 días, y para la señora Liliana María, 8.982 días, correspondiéndole en razón a ello, a la primera un porcentaje de la pensión del 17,64% y un 82,36% para la segunda, sobre un salario mínimo legal mensual vigente, y sobre el 50% que se había dejado en reserva, al estar disfrutando Manuela Cano Mora del restante 50%. Ordenó la indexación de la condena y autorizó los descuentos a salud sobre las mesadas ordinarias.

## **Recurso de apelación**

Oportunamente interpuesto por los apoderados de las partes así:

**Demandante,** afirma que el juez realizó una indebida valoración de las pruebas allegadas, en tanto, de las declaraciones rendidas y del interrogatorio de parte absuelto, se desprende claramente que la pareja se separó en el 2012, resultando aislado lo expuesto por la interviniente tendiente a que su relación inició en el 2011, al no estar respaldado ello en ningún otro medio de convicción, pues, la propia testigo traída al plenario por la misma, afirma que lo conoció en el 2015, sin que se pueda tener como prueba la investigación administrativa aportada por la demandada, en tanto, vulnera el derecho al debido proceso en la modalidad de contradicción y defensa, por no haber tenido oportunidad de debatirla, no encontrándose acreditados los 5 años de convivencia entre la señora Luz Amanda y Carlos Alberto.

**El curador,** aduce que para el caso no se logró acreditar la convivencia entre la señora Luz Amanda y el señor Carlos Cano, en los 5 años anteriores al deceso, por lo que solicita se revoque la sentencia.

**Interviniente**, afirma que para el caso no se probó la pervivencia del vínculo conyugal, en tanto, las visitas que realizaba el señor Carlos a la casa de Liliana, obedecían a la situación particular y personal de su hija Manuela, al haberse destacado por ser un padre responsable, adicional a que se debe tener presente que la señora Liliana en los hechos de la demanda afirma que su convivencia se dio desde que inició el matrimonio, esto es, el 11 de enero de 1998, por lo que no es dable establecer una convivencia desde fecha anterior, quedando por demás, plenamente establecida la de Luz Amanda con el señor Carlos Alberto por tiempo superior a los 5 años anteriores a la fecha del deceso del mismo, debiéndosele reconocer, en consecuencia, el 50% de la prestación de manera exclusiva.

Solicita que se revoque la sentencia, en cuanto, se abstuvo de imponer condena por intereses moratorios, al evidenciarse, para el caso, la presencia de una mora en el reconocimiento de la prestación.

**Protección S.A.**, pide se revoque la sentencia en cuanto condenó al pago de la indexación e impuso costas procesales, para ello esgrimió, frente al primer aspecto, que la condena tiene un mecanismo de actualización propio, el cual, se da año a año, tal y como se establece en la Ley 100 de 1993, encontrándose así, cubierta la devaluación de la moneda; frente al segundo punto, indica que al no haberse opuesto a la prosperidad de las pretensiones, no es dable emitir una condena en costas.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **Protección S.A.**, solicita se absuelva de la condena en costas, argumentando para ello que dicho concepto se interpone a la parte vencida en juicio, y para el caso, ello no ocurrió, en tanto, no se presentó oposición al pago de la prestación, aunado a que el litigio se dio al haberse dado una disputa de beneficiarias, mas no,

porque la entidad lo hubiese generado. Insta para que se absuelva del pago de la indexación al tener la prestación su propio mecanismo de revaluación.

**Luz Amanda Arias Valdés**, esgrime que de acuerdo con la prueba testimonial y documental, se advierte la convivencia exclusiva desde el 20 de julio de 2011, con el señor Cano Monsalve, lo cual, la hace merecedora a la pensión de sobrevivientes de manera exclusiva, pues, la demandante no arribó al proceso medios de convicción que dieran cuenta sobre la dependencia económica, adicional a que la misma se encontraba separada del afiliado fallecido, por lo que no puede concluirse que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión, máxime cuando no se puede determinar que el vínculo se mantenía vigente, y que no convivió con el mismo en los 5 años anteriores a la fecha de su deceso.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

De conformidad con lo expuesto y atendiendo los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico consiste en determinar si la a cónyuge separada de hecho o a la compañera permanente, les asiste derecho, de manera exclusiva, a recibir la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor Carlos Alberto, o si por el contrario la misma debe ser compartida de acuerdo al tiempo convivido con el causante, tal y como lo determinó el juez de instancia, de evidenciarse que la prestación debe ser distribuida entre las dos, se determinara la procedencia o no de los intereses moratorios, la indexación y la condena en costas.

Pues bien, atendiendo a que no es objeto de discusión que el afiliado fallecido dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y que



entre el mismo y la señora Liliana María Mora, pese a existir una sociedad conyugal vigente, se presentó una separación de hecho, es dable acudir a efectos de definir los beneficiarios de dicha prestación, a la norma que gobierna el caso, la cual para la fecha de fallecimiento del afiliado - 25 de octubre de 2016-, lo es el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, artículos 13, literal b, inciso tercero, el cual establece que *"En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente serán la esposa o el esposo. **Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente"***

De acuerdo con la normatividad transcrita, es de advertir que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, venía sosteniendo que, en dicha hipótesis, era necesario que, entre los cónyuges separados de hecho, para el momento del deceso mantuvieran, además, los lazos de afecto, socorro y ayuda mutua, dicho criterio fue variado en el sentido de que no es necesario demostrar tales circunstancias, toda vez que la referida exigencia no se encuentra prevista por el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por ello, a partir de la sentencia SL5169 de 2019, se varió el criterio y se dijo:

*"Por tanto, el ad quem incurrió en el error que se le endilga, pues el correcto alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 corresponde a que el consorte con vínculo conyugal vigente, aun separado de hecho, puede reclamar válidamente una pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido por lo menos 5 años en cualquier época con el causante afiliado o pensionado, tal como lo ha reiterado esta Sala en múltiples fallos, entre otras, en las sentencias CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ*

*SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019.*

En la SL359 de 2021, frente al tema indicó que:

*[...] En efecto, esta Corporación tiene adocctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado «en cualquier tiempo». Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).*

*Por lo visto, es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente.*

*/.../*

*En ese orden de ideas, la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia.*

*Así las cosas, a juicio de la Sala, el Tribunal restringió el alcance de la norma analizada al concluir que la demandante no acreditó que para el momento de la muerte del causante existía algún tipo de vínculo afectivo del cual se coligiera la permanencia de lazos familiares luego de la separación de hecho, en razón a que tal requisito no lo contempla la disposición en referencia.* (subrayas intencionales de la Sala)

Y en SL1476-2021, reitero:

*"conviene precisar que lo que habilita al cónyuge separado de hecho o de cuerpos a acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial, por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho (SL5141-2019). Igualmente, que no es requisito o condición legal que entre el causante y el cónyuge supérstite se mantengan lazos o relaciones de amistad, trato, comunicación, apoyo o de cualquiera otra naturaleza, pues no es el término que se extiende hasta la muerte de aquél el que le da el derecho a la prestación pensional, sino el término en el que se hubiere establecido de manera regular la convivencia cuya pérdida resulta de ordinario generando el rompimiento de cualquiera otra forma de relación y comunicación, situación que el legislador en modo alguno desconoció.* (resaltos intencionales de la Sala)

Tesis que ha sido sostenido, entre otras, en las sentencias SL1869-2020, SL966-2021, SL997-2021, SL1476-2021, SL1707-2021 y SL1871-2021.

De acuerdo con ello, al habérsele dado prevalencia al concepto de "*unión conyugal*" es factible reconocerle la pensión de sobrevivientes a la cónyuge, pese a que estuviera separada de hecho del causante, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el tiempo legal establecido de cinco (5) años, en cualquier época, ello, en tanto, se debe tener presente que el legislador cuando hizo alusión a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie "*separación de hecho*", presupuso que ya no existía, ya no había vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte, no siendo dable exigir el requisito de mantenimiento de los lazos de socorro y ayuda mutua.

Ahora, frente al requisito de convivencia frente a la compañera permanente, cuando se está incurso en la hipótesis del inciso 3 del literal b del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que es la misma del artículo del artículo 47 de la Ley 100, el que remite a lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral al realizar una interpretación de la misma, a partir de la sentencia SL1730 de 2020, indicó que la "*exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada...*"

Precisando en dicha providencia que "*conforme al análisis hasta aquí efectuado, de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible*

*ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación....”* Criterio reiterado entre otras en las sentencias SL1698-2021 y SL1905-2021.

No puede perderse de vista que la Corte Constitucional en sentencia SU 149-2021, al revisar una tutela interpuesta por Positiva Compañía de Seguros S.A., en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al no haber casado la providencia en la cual se le ordenó reconocer la cuota parte de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente de un afiliado pese a que no demostró la convivencia con el causante por un término no inferior a cinco años continuos con anterioridad a su muerte, ello, al haber modificado su postura y sostener que la exigencia de ese periodo de convivencia opera únicamente para el caso del cónyuge o compañera permanente del pensionado fallecido, más no, cuando se trata de un afiliado fallecido, pues, frente a estas no se exige ningún tiempo mínimo, la Corte Constitucional, estableció que dicha sentencia desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues, reconoció derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para el efecto, conduciendo a resultados desproporcionados respecto de la desprotección del grupo pensional ante reclamaciones ilegítimas y en relación con la finalidad de la pensión de sobrevivientes, que es amparar la familia del fallecido, **revocando** la sentencia de la Corte

Suprema, ordenando la emisión de una nueva providencia en la cual se acate el precedente adoptado, esto es, que se debe acreditar un término mínimo de convivencia de 5 años por parte de la compañera permanente del afiliado fallecido.

Luego, al ser dicha decisión de obligatorio acatamiento, pues así se explicó en sentencias SU 298 de 2015 y T – 109 de 2019, al indicar que las decisiones emitidas por la Corte Constitucional en sentencias SU tiene carácter ***vinculante***, *no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte, y se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, al tenerse en cuenta el principio de supremacía constitucional y la importancia que tienen las decisiones sobre la interpretación y alcance de los preceptos constitucionales*, destacando seguidamente la Corporación la relevancia de la obligatoriedad de las sentencias de unificación, precisando que: *la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, **aun cuando sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones***. A su vez, ***“en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) [...], basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que [...] unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos*** (Subrayado y negrillas fuera del texto).

Así las cosas, y teniendo en cuenta los requisitos para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes cuando la misma se disputa entre una compañera permanente y una cónyuge separada de hecho, pasa la Sala a analizar la prueba aportada, encontrando que se comprueba con el registro civil de matrimonio que Carlos Alberto Cano Monsalve y la señora Liliana

María Mora Gil, contrajeron nupcias el 11 de enero de 1986, vínculo que fue registrado el 14 de enero de 1998, sin que exista disolución de la sociedad conyugal, iniciándose la convivencia en la primera calenda.

Ahora, frente al lapso de duración de esta convivencia se tiene que Liliana María Mora Gil, en el interrogatorio de parte, si bien indica que estuvieron juntos hasta principios de 2012, también lo es que a la pregunta si sabía por qué el señor Carlos alquiló un apartamento en el 2010, respondió *pues, el quería de pronto, darse un tiempo, inclusive él nos dio la dirección, nos invitaba al apartamento a todos allá y nos invitaba a comer o almorzar y compartíamos mucho con él allá*, y a la pregunta *entonces él se fue a vivir a ese apartamento que alquiló en el 2010*, respondió: *sí señor*, adicional a que afirmó que el señor Carlos, cuando se separaron, *primero se fue a vivir donde su hermana, Gladys del socorro, después de fue a vivir a un apartamento solo y después se fue a vivir con Luz Amanda*.

El testigo Daniel Alejandro Cano Mora, hijo de Liliana y Carlos, afirmó que sus padres dejaron de vivir juntos a finales de 2011, no obstante, después indicó que *el vivió con nosotros todo el 2011 y se fue más o menos en el 2012. Inicialmente se fue para donde una hermana, después se fue a vivir solo a un apartamento que arrendó cerca al parque de Itagüí, de igual forma indicó que su padre vivió con la señora Luz Amanda desde el 2012 hasta la fecha de su deceso*.

Alexandra Mora Gil, hermana de la señora Liliana, frente al tema de la convivencia de la misma con el señor Carlos, adujo que no sabe los motivos por los cuales Carlos se fue de la casa a principios de 2012, aclarando que él se fue a vivir después de eso, *primero con una hermana, luego vivió solo, y luego con la señora Amanda*, no obstante, no sabe cuánto tiempo convivió con Amanda. A la pregunta, el tiempo que vivió solo Carlos, donde lo hizo, respondió, *el vivió, yo creo que en un apartamento en Itagüí, solo, es más Liliana y*

*manuela iba y le hacían visita. Afirmando frente a la pregunta ¿Sabe en qué fecha vivió el solo? Que, no se tampoco, sé que fueron meses o un año que vivió solo. Al requerírsele para que indicara la fecha en la cual Carlos decidió irse a vivir con Luz Amanda, manifestó: como a principios del 2012, razón por la cual el juez le indago: ¿Usted dice que Carlos se fue en el año 2012, y luego le preguntan qué cuándo inició la convivencia con la señora Luz Amanda y dice que a principios del 2012, sin embargo dice que el vivió solo por más de un año, por favor nos aclara esta situación, para que año el señor Carlos Alberto se va a vivir inicialmente con su hermana y luego solo? Respondió: El año no sé, por eso le digo doctor, él se fue en el 2012, de pronto antes o después fue que vivió solo, por eso le digo, no sé si vivió un mes o dos meses solo eso, pudo haber ocurrido en ese 2012. Y al volvérselo a preguntar ¿para qué año vivió el solo? Indicó Sinceramente no sé, y ¿Cuánto tiempo tuvo el apartamento arrendado? dijo "No sé" y ¿para qué año lo arrendó? Respondió, No sé. Por eso, la fecha en que el vivió solo y con la hermana no la sé.*

Adicional a estas declaraciones, se encuentra que, en la investigación administrativa realizada por la entidad, la señora Liliana indicó que para la fecha de fallecimiento no vivía con el señor Carlos Alberto, pues, hacía 5 años no lo hacía, adicional a que manifestó que Carlos Alberto convivía con Luz Amanda. En dicha investigación el señor Álvaro de Jesús Cano Monsalve, hermano del causante, advirtió que Carlos no vivía hacía 6 años con la señora Liliana, pero lo hacia con Luz Amanda hacía 5 años, supuesto que reafirmó Gladys del Socorro Cano Monsalve, igualmente hermana del afiliado fallecido, quien dijo que Carlos convivió con la señora Luz Amanda hacia 5 o 6 años, encontrándose separado de hecho de Liliana hacia 6 años.

De otra parte, no puede pasarse por alto, y mas atendiendo a lo expuesto en las declaraciones, que el señor Carlos Alberto Cano Monsalve, suscribió contrato de arrendamiento de vivienda el 15 de agosto de 2010.

En lo que atañe a la convivencia de Luz Amanda y Carlos Alberto, fue allegada la declaración de Gloria Inés Ossa Acevedo, quien afirmó ser vecina de Luz Amanda, hace 13 años, así como la estilista y amiga de la misma, y en razón a ello constarle que Carlos Alberto vivió con Amanda en el barrio Cristo Rey, y a la pregunta, sabe hace cuánto vivía el señor Carlos con la señora Amanda, en esa casa, dijo que *6 años*, empero, luego indica que desde el 2015, y al requerirla la apoderada de la demandante para que explicara por qué razón afirmaba que ellos vivieron 6 años, conociendo a Carlos en el 2015, cuando el mismo falleció en el 2016, adujo, *seguramente me enrede en la cuenta del tiempo. Es más tiempo, disculpe hice la cuenta mal, me enrede con la cuenta*

Luego, concatenando estos medios de convicción obrantes en el plenario, a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S, se comprueba que la señora Liliana María inició la convivencia con el señor Carlos Alberto el 11 de enero de 1986, esto es, cuando se casaron, independientemente de que el registro de tal acto se hubiere dado en 1998, pues, esto obedece solo a una formalidad externa, convivencia que se dio hasta el 2010, fecha en la cual el señor Carlos se fue de la casa, y ello es así, pues se evidencia con el interrogatorio de parte rendido por la señora Liliana, que pese a que la misma indica que su esposo se fue de la casa en el 2012, también lo es, que confiesa que después de eso, se fue a vivir con una hermana y luego se fue a vivir solo en un apartamento que arrendó, el cual, según el contrato de suscrito por él mismo, fue el 15 de agosto de 2010, adicional a que los testigos, esto es, el hijo de la pareja y la hermana de la demandante, si bien pretendieron hacer ver que estuvieron juntos hasta el 2012, fueron enfáticos y coincidieron en afirmar que el señor Carlos después de haberse ido de la casa, vivió donde una hermana y con posterioridad alquiló un apartamento en Itagüí, por lo que se desprende sin duda alguna, y contrario a lo



afirmado por la apoderada de la demandante en el recurso de apelación, que la pareja convivió por lo menos hasta el día 15 de agosto de 2010, tal y como lo concluyó el a quo, al no poderse establecer con certeza fecha anterior, adicional a ello, también se debe considerar que esta demandante no logró desvirtuar lo dicho por ella misma de manera espontánea en la declaración rendida al momento de realizarse la investigación administrativa, esto es, que no vivía con el fallecido hacía 5 años, indagación que por demás no es violatoria de ningún tipo de derecho, pues, en el transcurso del proceso, cuando fue aportada la misma, la parte tuvo la oportunidad de controvertirla, debatirla y aportar pruebas que la desvirtuaran, lo cual, como se dijo no aconteció, por lo que se confirma la sentencia en cuanto estableció la fechas de convivencia de la señora Liliana y el señor Carlos entre el 11 de enero del año 1986 al 15 de agosto del año 2010, así como en cuanto determinó que la convivencia de la señora Luz Amanda y el señor Carlos se dio entre el 20 de julio de 2011 y el 25 de octubre de 2016, en tanto, **primero**, la parte demandante no logró demostrar que la misma se hubiere dado desde después; **segundo**, fue la que señora Luz Amanda indicó en la investigación administrativa, la cual, no es refutada por Protección S.A, al no haberse opuesto a la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión, **tercero**, coincide y está dentro del rango referido por los hermanos del causante al momento de declarar en la investigación administrativa, al haber afirmado que la pareja llevaba 5 o 6 años, así como también se halla acorde con lo dicho por la señora Gloria Inés Ossa Acevedo, quien expuso que la pareja convivió aproximadamente 6 años, a más que si bien no se desconoce que ella en algún momento dijo que conoció al señor Carlos en el 2015, ello por si solo no desecha lo dicho, pues, a renglón seguido explicó que se debió a un lapsus, **cuarto**, por cuanto fueron enfáticos, tal y como ya se advirtió, tanto la señora Liliana, como Daniel Alejandro y Alexandra Mora, en afirmar de manera categorica, que el señor Carlos vivió solo y después se fue a convivir con la señora Luz

Amanda, indicando Alexandra, que Carlos vivió unos meses solo o un año, y luego se fue con Luz Amanda, lapso, que concuerda con el contrato de arrendamiento del apartamento, y la fecha tenida en cuenta por el juez de primera instancia, y además coincide con la plasmada en la investigación administrativa. Tiempo que colma la exigencia de ley como se explica por la Corte Constitucional, esto es, que la compañera permanente debe acreditar 5 años de convivencia con el afiliado, a más que con lo decidido no se afecta la sostenibilidad financiera del sistema, en tanto, lo que se distribuye es el 50% de la pensión que se dejó en reserva, prorrateándose el derecho entre la compañera permanente y la cónyuge.

Ahora, frente a la inconformidad planteada por la apoderada de la interviniente, esto es, no reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es de indicar que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha sido pacífica y reiterada en establecer que estos tienen un carácter resarcitorio y no sancionatorio, de manera que su imposición no está sometida a un análisis de la conducta de la respectiva entidad de seguridad social y a su posible apego a los postulados de la buena fe, también lo es que dicho órgano ha reconocido que existen algunos escenarios excepcionales en los que no se puede asumir que la administradora de pensiones esté en mora de pagar las prestaciones a su cargo, bien porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente -y en aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas- o porque existe algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la jurisdicción ordinaria (véase la sentencia SL454-2021 y SL1476 de 2021, entre muchas otras).

Así, al estarse en este caso dentro del último evento, pues la entidad demandada advirtió que el afiliado fallecido tenía dos posibles beneficiarias

de la prestación que concurrieron a su reclamación, ese conflicto impedía que reconociera la pensión de forma automática e irreflexiva, sin que antes la justicia ordinaria verificara a quién le correspondía el derecho, y en que porcentajes, con la citación de las interesas y con todas las garantías relativas al debido proceso, por lo que, contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, la entidad demandada no estaba en mora de reconocer la pensión de sobrevivientes solicitada sino que actuó con observancia de los parámetros de ley (art. 34 Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y 5º Ley 1204 de 2008), en consecuencia, no es dable imponerle el pago de los intereses moratorios, por lo que se confirma la decisión en este apartado.

En lo que atañe con la inconformidad frente a la orden de indexar la condena, es de indicar que, la actualización de las sumas adeudadas no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo, adicional a que tampoco puede verse como parte de la mesada pensional, al no satisfacer necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real.

Así las cosas, cuando se acude a la jurisdicción y se establece por parte del aponderador judicial un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema de pensiones, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros, pues, tiene la obligación de imponer una condena que ponga a la persona en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de

la Ley 446 de 1998, según el cual “*dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales*”. Y la forma en que aquello se garantiza, en el marco de la protección especial a la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda, teniendo el deber el juez de trabajo, incluso de manera oficiosa de disponerla, en tanto, con ello esta desarrollando los principios de equidad, justicia social y buena fe, lo cual, tiene respaldo constitucional, razón por la cual, es dable mantener la condena impuesta por la primera instancia, pues, se itera, la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación, sumado a que el aumento de la mesada año a año, se torna en un concepto diferente y disímil a la indexación, adicional a que no ordenar la misma conllevaría a que las condenas fueran deficitarias y el acreedor reciba un menor valor, supuesto que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.

Finalmente, frente a la inconformidad frente a la imposición de costas, la misma, está llamada a prosperar, en tanto, de acuerdo con lo regulado en el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P aplicable por remisión analógica, las señoras Liliana y Luz Amanda debían acudir al proceso ordinario laboral a fin de que se dirimiera la controversia presentada entre las dos, la cual fue advertida por Protección S.A, al momento de contestar la solicitud de pago de la pensión de sobrevivientes, decidiendo en razón a ello dejar en suspenso el reconocimiento del 50% de la prestación hasta tanto la justicia ordinaria resolviera lo que tiene sustento legal en el artículo 5º de la Ley 1204 de 2008, por lo que se revoca el numeral sexto de la parte resolutive de la decisión. Sin costas en esta instancia ante las resultas de los recursos interpuestos.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca el numeral sexto** de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Liliana María Mora Gil**, en contra de **Protección S.A.**, donde se vinculó como interviniente excluyente a la señora **Luz Amanda Arias Valdés**, y como litisconsorte necesaria por pasiva a **Manuela Cano Mora**, para absolver a Protección S.A., de las costas impuestas. En lo demás se confirma la decisión revisada.

Sin costas en esta instancia la no haberse causado ante las resultas de los recursos.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

**Certifico:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 114** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **01 de julio de 2021.**

\_\_\_\_\_  
Secretario